

Bolivia **no diversifica sus exportaciones** y la relación **con China es la más desequilibrada**

(Pág. 2-4)



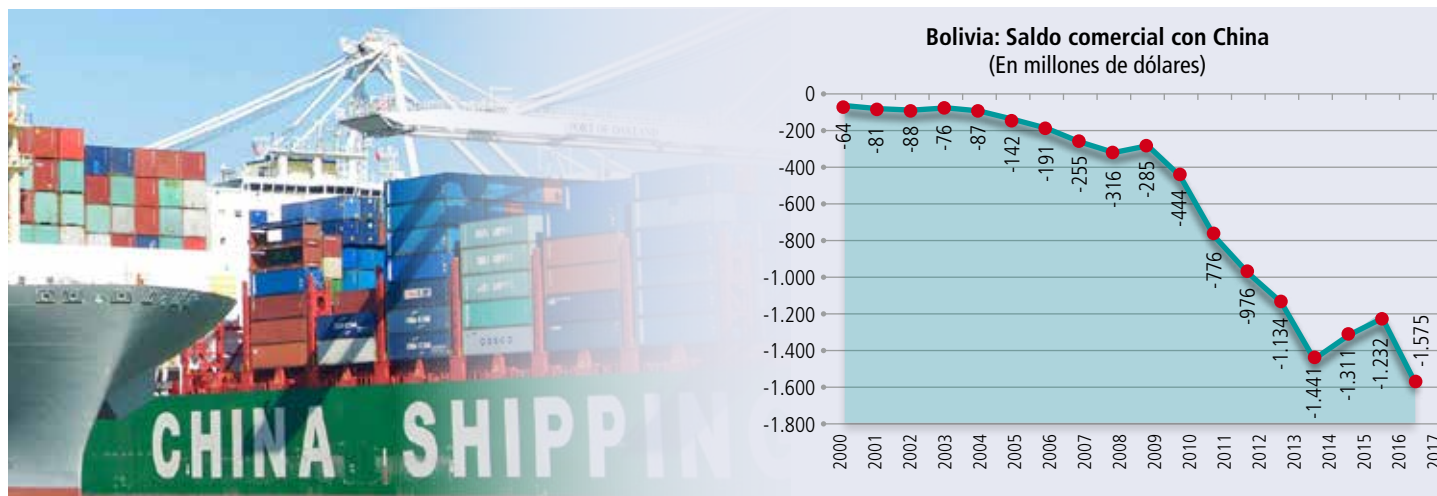
■ De cada 10 jóvenes, cuatro no tienen empleo estable y la mayoría espera más de 6 meses para tener trabajo.
(Pág. 5-7)

■ Solo la cuarta parte del presupuesto de gobernaciones y municipios se destina a inversión en obras y proyectos.
(Pág. 8-9)

■ La consulta en hidrocarburos es previa, obligatoria y debe articularse a los planes de gestión territorial.
(Pág. 11-13)

■ El litio se exportará como materia prima y otra parte será industrializada, esa decisión cambia la estrategia
(Pág. 14-15)

Por reducida diversificación de exportaciones Bolivia vendió a China **productos por \$us 450 millones** y le compró por más de **\$us 2.000 millones**



Fuente: Fundación Jubileo con datos del INE.

La poca diversificación productiva con destino a las exportaciones es la causa de una desequilibrada balanza comercial entre Bolivia y China. El 2017, la compra de productos chinos fue por 2.027 millones de dólares, la cifra histórica más alta; en tanto que los productos bolivianos se exportaron por 452 millones de dólares.

Bolivia vende a China principalmente materias primas. De las 67 partidas arancelarias, 96% corresponde a minerales; luego está madera aserrada y pelo de alpaca y llama.

Mientras la principal oferta exportadora no tiene valor agregado, las mayores compras de productos chinos son minibuses y otros automóviles, turbinas de vapor, antenas, celulares, neumáticos,

herbicidas, insecticidas, plásticos, aparatos electrónicos y otros. En su oferta hay aproximadamente 3.600 partidas arancelarias.

El comercio bilateral entre Bolivia y China se incrementó progresivamente desde 2005. Ese año, el saldo comercial fue negativo para el país, con una diferencia de -142 millones de dólares. El 2017, la brecha comercial alcanzó a -1,575 millones de dólares.

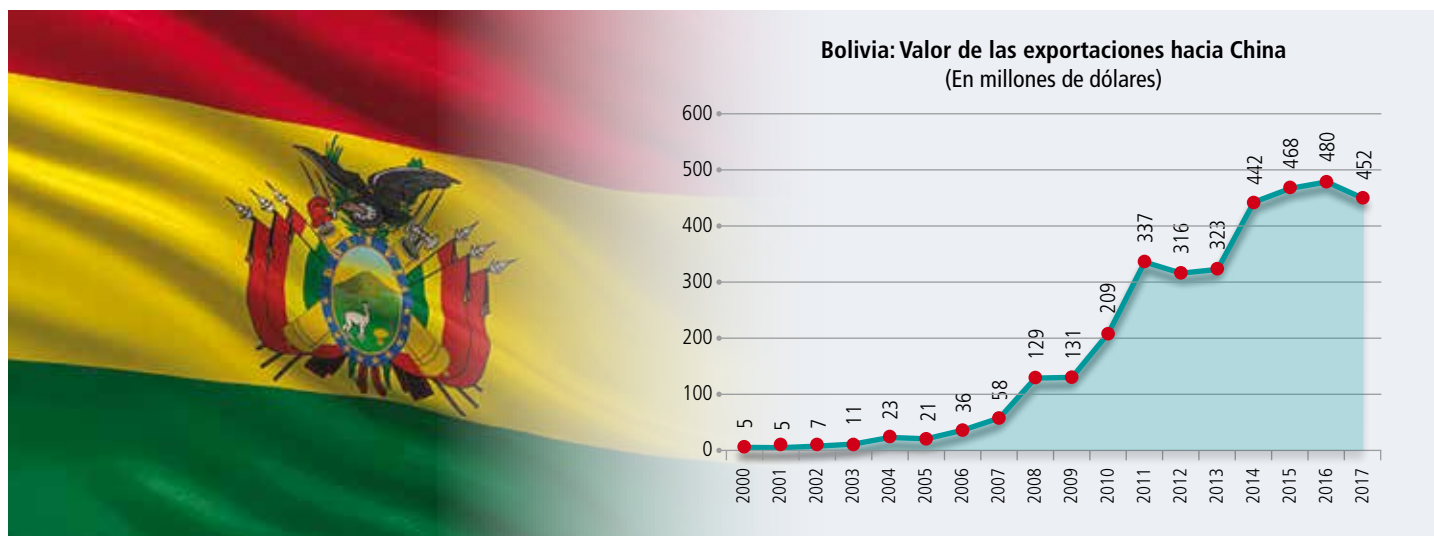
El mayor saldo comercial negativo para el país es en importaciones de la industria manufacturera. Durante el periodo enero-junio de 2018 se compraron productos de ese rubro por 948 millones de dólares y se exportó a ese mercado por casi 11 millones de dólares en productos manufacturados.

Bolivia: Saldo comercial con China, según la clasificación internacional industrial uniforme, en dólares

Categoría de Tabulación	Enero - Junio 2017			Enero - Junio 2018		
	Exportaciones ⁽¹⁾	Importaciones	Saldo Comercial	Exportaciones ⁽¹⁾	Importaciones	Saldo Comercial
Total	209.713.081	968.998.080	-759.284.999	223.497.756	948.305.691	-724.807.935
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	147.302	287.374	-140.072	503.860	235.124	268.736
Pesca	0	1.439	-1.439	0	4.602	-4.602
Explotación de minas y canteras	198.114.110	104.069	198.010.041	211.478.314	138.535	211.339.779
Industrias manufactureras	11.451.669	968.467.982	-957.016.313	11.514.082	947.899.750	-936.385.668
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	0	56.589	-56.589	0	1.011	-1.011
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	0	58.279	-58.279	0	22.618	-22.618
Efectos personales	0	22.348	-22.348	1.500	4.051	-2.551

Fuente: Fundación Jubileo con datos del INE.

⁽¹⁾ Incluye reexportaciones



Fuente: Fundación Jubileo con datos del INE. No incluye reexportaciones.

EXPORTACIONES A CHINA

La venta de productos hacia China entre 2000 y 2006 representaba menos de 1% del total de las exportaciones. Durante los últimos cuatro años llegó a 5% del valor de las exportaciones nacionales. En promedio, Bolivia ha sido exportadora de 67 partidas arancelarias hacia China durante el periodo 2000-2018.

Por la baja diversificación, los productos exportados son tradicionales, principalmente minerales. Los productos no tradicionales generaron un valor de exportación de apenas 19 millones de dólares en la gestión 2017, frente a más de 432 millones dólares de exportación de productos tradicionales.

Entre enero y junio de 2018, y comparado con similar periodo del año anterior, el valor de las exportaciones a China creció en 6,4%. En el transcurso de este año, siete productos representan 97% del total exportado a ese país.

En su mayoría, son minerales y concentrados de zinc, plata, plomo, cobre y sodio que superan los 210 millones de dólares. El incremento de la exportación de madera aserrada en este último

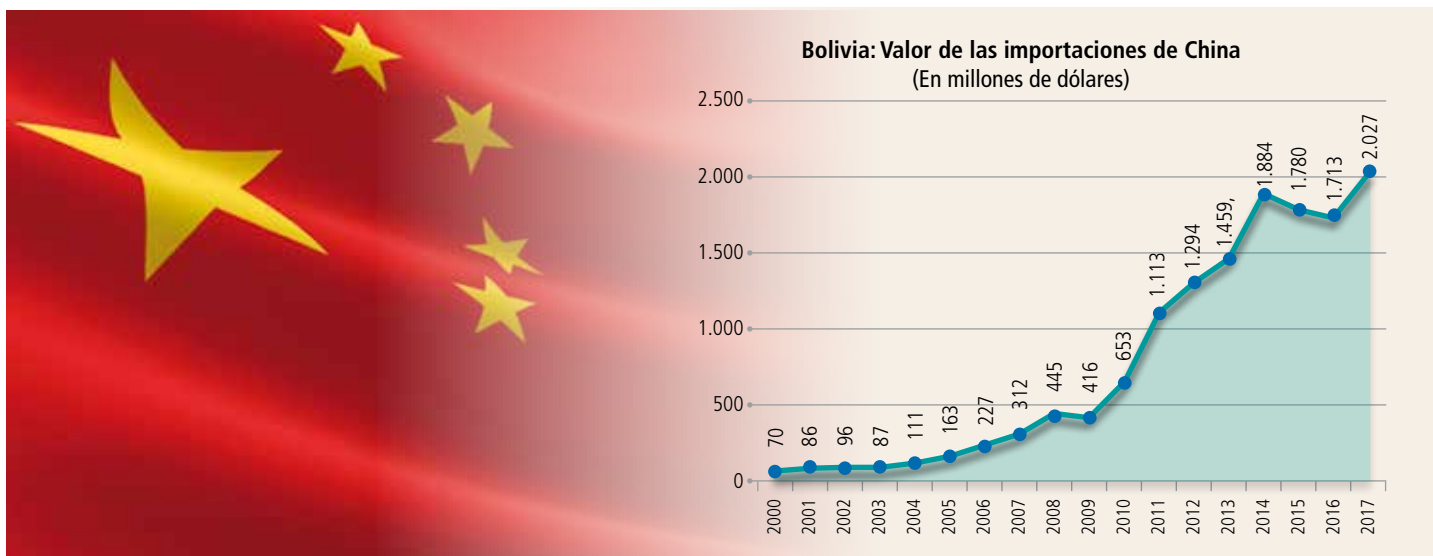
periodo fue de 39% y la exportación de pelo de alpaca y llama aumentó en 81%.

Bolivia: Valor de exportación a China de principales productos, en dólares

Producto	Enero - Junio 2017	Enero - Junio 2018	Variación porcentual
Mineral de zinc y sus concentrados	87.525.640	103.241.867	18,0
Minerales de plata y oro y sus concentrados	64.941.889	65.425.813	0,7
Minerales de plomo y sus concentrados	26.641.782	28.624.494	7,4
Minerales de cobre y sus concentrados	11.043.661	9.204.326	-16,7
Boratos de sodio naturales y sus concentrados	6.055.429	3.680.705	-39,2
Madera aserrada o desbastada	2.127.977	2.962.936	39,2
Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama	1.406.070	2.554.036	81,6

Fuente: Fundación Jubileo con datos del INE.





Fuente: Fundación Jubileo con datos del INE.

Las reexportaciones y efectos personales hacia China, en el periodo enero-junio de 2018, sumaron 435.102 dólares.

IMPORTACIONES DE CHINA

Las importaciones de China se incrementaron de manera considerable desde el año 2000; hasta 2017, el aumento fue de 2.807%; y en el periodo 2005-2017 fue de 1.143%.

Las importaciones de China representaron en 2017 el 22% del total de las compras que efectúa el país del resto del mundo, y se constituye en el mayor vendedor de productos hacia Bolivia. Hasta el 2005, en promedio, las importaciones de China representaban menos de 5% respecto al total.

Bolivia: Valor de importaciones de China de principales productos, en dólares

Producto	Enero-Junio 2018
Vehículos para el transporte de 10 a 18 pasajeros	38.446.852
Turbinas de vapor	34.270.162
Antenas y reflectores de antena	33.515.918
Neumáticos y llantas para automóviles, autobuses o camiones	26.092.810
Teléfonos móviles	24.133.807
Herbicidas, reguladores e inhibidores del crecimiento de las plantas	23.611.460
Insecticidas	16.935.464
Dispositivos semiconductores fotosensibles células fotovoltaicas	16.932.209
Vehículos automóviles	16.324.274
Vehículos automóviles para transporte de mercancías	15.593.898
Motocicletas	14.726.983
Aparatos de transmisión o recepción de voz y/o imagen	13.841.639
Polietileno tereftalato (PET)	10.458.178
Estación base	10.109.070
Hornos industriales o de laboratorio	9.344.765
Laminados planos de hierro o acero	8.924.492
Tejidos de punto de fibras sintéticas	8.165.768
Construcciones y sus partes de fundición, hierro o acero	7.969.994

Fuente: Fundación Jubileo con datos del INE.

En la oferta de productos de China hay cerca de 3.600 partidas arancelarias.

En estos primeros seis meses del año, el valor total de las importaciones de China, y comparando con similar periodo del año anterior, disminuyó en -2,1%.

Hasta junio de 2018, el principal producto importado fue por la compra de vehículos tipo minibús, por más de 38 millones de dólares; los siguientes productos fueron turbinas de vapor, por 34 millones; antenas, por 33 millones; neumáticos, por 26 millones; celulares, por 24 millones; herbicidas, por 23 millones e insecticidas, por 16 millones de dólares. Los 19 principales productos de ese país representan cerca de 35% del total de las importaciones.

DIVERSIFICACIÓN Y OPORTUNIDADES

Se advierte una reducida diversificación de las exportaciones, siendo la causa la baja productividad para la limitada venta de productos con valor agregado.

El mercado de ese país tiene 1.400 millones de consumidores. La oportunidad está en potenciar la diversificación exportadora hacia China, como por ejemplo en el rubro de productos agrícolas, para lo cual se debe analizar la pertinencia de acordar cuotas arancelarias y medidas fitosanitarias.

Bolivia requiere superar la excesiva dependencia de la exportación de materias primas, condición que no ha cambiado, lo que conlleva no solo a expandir los flujos comerciales con China, sino a desarrollar acciones para modificar su estructura.



41% de los jóvenes no tiene empleo estable y la migración es su ruta para buscar un mejor destino

Despeditarse de la familia y marcharse es la opción de los jóvenes que no encuentran empleo en sus lugares de residencia. Algunos hacen su primera parada en el centro urbano más próximo y otros pasan las fronteras, principalmente hacia Argentina y España.

En Bolivia, 41% de los jóvenes no tiene empleo estable, 85% de los que tienen trabajo no aporta a las AFP para su jubilación y 78% ha tenido que buscar un puesto laboral durante más de seis meses, según el estudio "Jóvenes y Empleo", elaborado por la Red de Líderes por la Democracia y el Desarrollo (Relidd).

La Relidd es una iniciativa juvenil con actores de distintas regiones del país que emergió de procesos de formación impulsados por Fundación Jubileo y Fundación Hanns Seidel.

La mayor migración corresponde al grupo poblacional que tiene entre 15 a 29 años de edad.

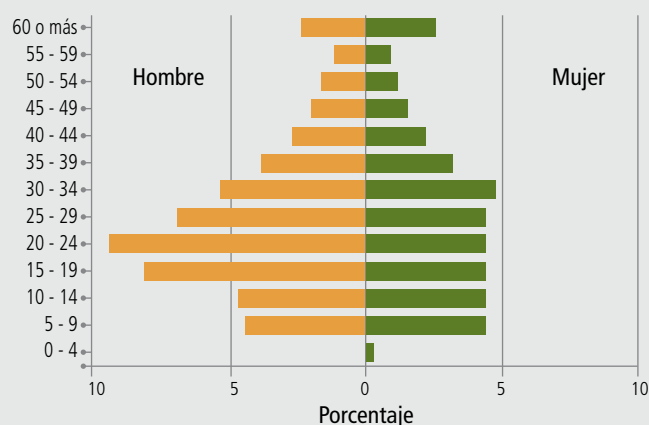
MIGRACIÓN Y JUVENTUD

Una creciente tendencia de urbanización de Bolivia es el resultado de la migración interna (entre regiones, municipios y departamentos); así como la migración trasfronteriza, con un movimiento creciente hacia países como Argentina, España, Brasil y Chile.

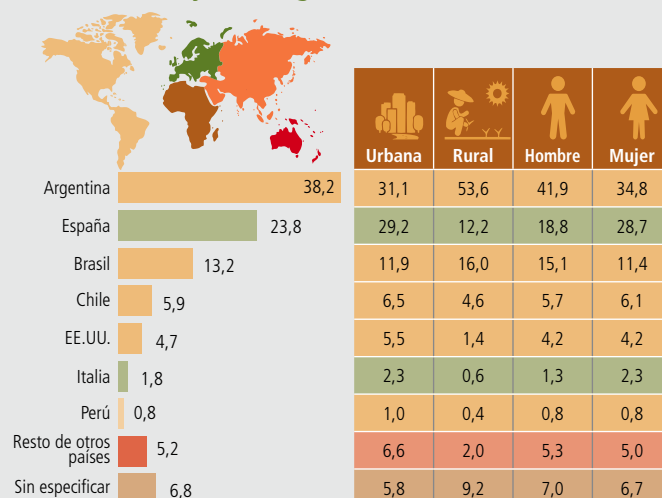
Con base en datos del PNUD, se estima que cada año buscan incorporarse al mercado de trabajo unas 100.000 personas, la mayoría jóvenes, quienes van engrosando la informalidad.



Población migrante
Periodo 2007 - 2012



Porcentaje de emigrantes internacionales

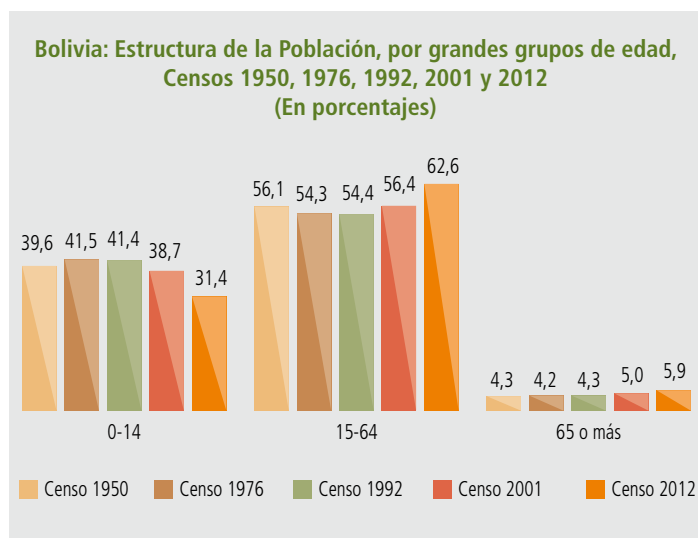


Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El investigador Alfonso Hinojosa complementa que La Paz es el mayor departamento expulsor de mano de obra joven, principalmente del área rural, con destino a Argentina y Brasil.

Bolivia es un país predominantemente joven, 42% de su población es menor de edad, en comparación con 26% en Chile, 29% en Argentina y 30% en Brasil. (Informe PNUD 2014), a esto se denomina “primavera poblacional”, situación que caracteriza al país desde hace 15 años.

Otra caracterización es la del “bono demográfico”. Seis de cada 10 bolivianos tienen entre 15 a 64 años de edad y una cuarta parte de la población está entre los 18 a 25 años. Son jóvenes con mejores niveles educativos y con una fuerza de trabajo mejor calificada que generaciones anteriores, con una potencialidad para aportar al desarrollo si se les brinda oportunidades.



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

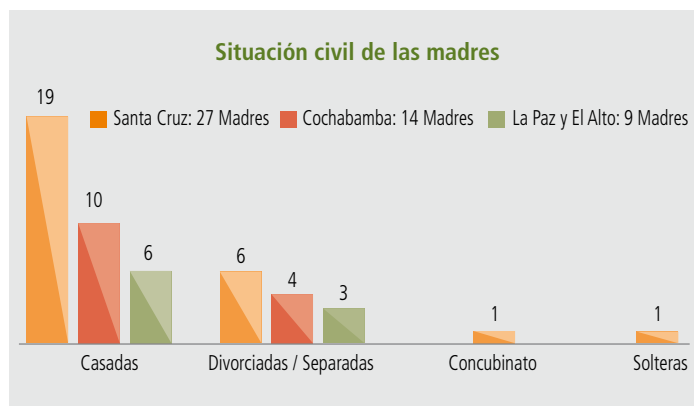
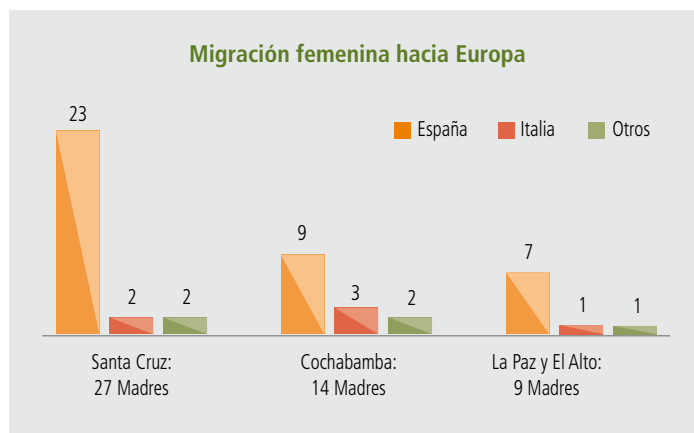
Si no se transforma la matriz productiva en el país no se generarán nuevas oportunidades; consecuentemente, habrá miles de jóvenes con mejores niveles de estudio, pero trabajando en el sector informal, en tareas no calificadas. Haber logrado un mayor nivel de educación no es una garantía para acceder a un buen trabajo, frustrando peligrosamente las expectativas de las nuevas generaciones.



MUJER Y MIGRACIÓN

En la investigación realizada por Maggie Jauregui y su equipo, denominada “Maternidad Transnacional: Transformaciones y Vulnerabilidades”, muestra una realidad poco analizada y conocida sobre la migración femenina.

Según la muestra del estudio, de las mujeres que son madres y migran a Europa el principal destino es España e Italia, la mayoría tiene una situación de casada y divorciada.



Esta situación de separación con los hijos(as) y parejas tiene efectos en ambos lados, como menciona el estudio (*Aquí y Allá*), donde las madres atraviesan un periodo que luego quieren “borrar”, pero que con los años muestra sus efectos especialmente afectivos y de comunicación al interior de la familia, ocasionando, en algunos casos, que después de haber retornado, las madres vuelvan a migrar.

Al respecto, Yuri Torrez, en su investigación sobre la migración de jóvenes y el aspecto intercultural, explica los flujos de migración al área metropolitana de Cochabamba y cómo ésta se ubica en espacios territoriales determinados (zona Sur), donde se refuerzan las expresiones socioculturales; pero también se diferencia el origen de estos jóvenes, dejando marcados aspectos de discriminación social a los que se ven expuestos por los jóvenes de la zona Norte de Cochabamba, así como también la definición de sus comportamientos políticos.

PROPUESTAS DE ESFORDD

Sobre este tema de la realidad boliviana, “Jóvenes y Migración en Bolivia”, la Escuela de Formación para la Democracia y el Desarrollo (ESFORDD) organizó seminarios en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Montero, Santa Cruz, Sucre, Potosí y Tarija con expositores¹ que brindaron información y análisis desde distintas perspectivas, con las siguientes constataciones:

1. El acceso a mejores oportunidades de **educación y trabajo** son las principales razones que motivan la migración de la población joven en Bolivia.
2. Entre 2007 a 2012, en Bolivia hubo un cambio de residencia o **migración interna de 661.786 personas**, de las cuáles casi la mitad (45%) eran jóvenes entre 15 a 29 años. (Datos del Censo 2012)
3. Los municipios del área metropolitana de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba; en ese orden, registraron 66% de los migrantes internos. De cada 10 jóvenes en Bolivia, 7 residen en las ciudades principales e intermedias del eje troncal.
4. La emigración de bolivianos al exterior es mayoritariamente hacia **Argentina** (38%), **España** (24%), Brasil (13%), Chile (6%) y Estados Unidos (4%), entre los principales destinos.
5. La migración internacional de mujeres, en muchos casos madres (maternidad transnacional), ocasiona una separación familiar con consecuencias que merecen ser más estudiadas.

PARA PROFUNDIZAR

La realidad de la migración supone un movimiento de personas en busca de cubrir sus necesidades y encontrar oportunidades laborales, educativas u otros motivos afines.

En las políticas públicas sobre migración, existe un enfoque administrativo; no hay acompañamiento del Estado para cualificar la migración y la población migrante está expuesta a trabajos de explotación y sin seguridad.

La falta de información sólo permite hacer aproximaciones a esta realidad. Otro tema conexas que merece mayor investigación son las remesas que se reciben del exterior; según datos del Banco Central de Bolivia, éstas llegarían aproximadamente a 180 millones de dólares anuales, convirtiéndose en un ingreso importante para la manutención de las familias y para cierta estabilidad económica del país.

Se cuenta con pocos estudios e información sobre la migración relacionada a la fuga de cerebros por falta de oportunidades de empleo bien remunerados, sobre los efectos de la migración rural sobre la seguridad alimentaria, sobre los flujos migratorios temporales donde muchos jóvenes van transitando por varias regiones del país e incluso zonas fronterizas buscando oportunidades de trabajo.

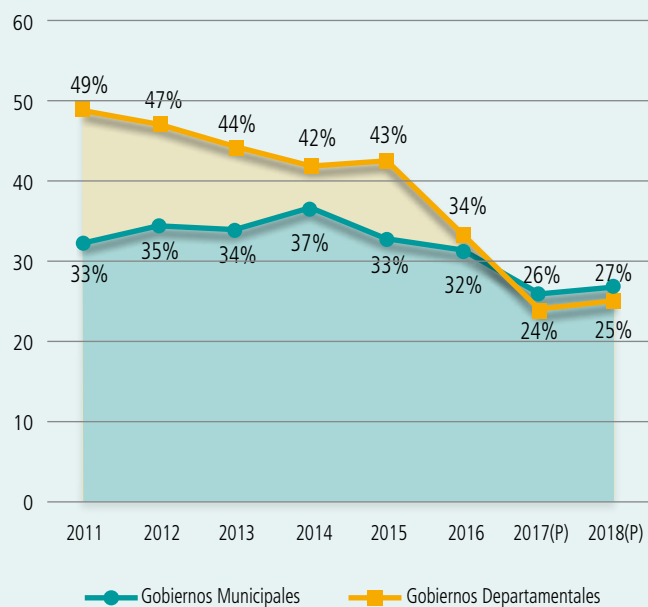
¹ Expositores: Msc. René Pereira, Msc. Alfonso Hinojosa, Lic. Christian Aramayo, Lic. Maggie Jauregui, Lic. Luis Carlos Barrios, Lic. Yuri Torrez, Lic. Tibor Lanza y el Lic. José Rocha.



La inversión en gobernaciones y municipios se redujo a la cuarta parte de su presupuesto



**Inversión Pública con relación a gastos totales
Gobernaciones y municipios 2011-2018**
En porcentaje



Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 2005-2016 de Operaciones de flujo de caja de Gobiernos Autónomos Departamentales. 2017 y 2018 Presupuesto General del Estado (P), del flujo Financiero Consolidado.
No se incluye servicio de la deuda y otros usos de fondos.

La proporción del gasto total que los gobiernos departamentales y municipales destinan a inversión pública ha disminuido a menos de 35% para el año 2016 y para el 2018, según proyecciones del presupuesto, bajaría a menos de 30%. La mayor parte se asigna cada vez más a gastos corrientes.

Las inversiones (obras y proyectos) se redujeron significativamente, principalmente desde 2015, como consecuencia directa de la disminución de ingresos por la caída de los precios de venta de los hidrocarburos, posterior al periodo de bonanza.

En el caso de los gobiernos departamentales, el año 2011 se destinó a inversión 49% de su presupuesto y para 2018 se asignaría solamente 25%.

En los gobiernos municipales, el año 2014 se destinó 37% a inversión; cifra que se reduciría a 27% para la presente gestión.

Al parecer, el cambio de contexto por la disminución de ingresos fiscales, ha resultado en que los gobiernos subnacionales hicieron ajustes que impactaron principalmente en la inversión pública.

NORMATIVA

Desde la época de la Participación Popular y Descentralización Administrativa de los años '90, los gobiernos subnacionales están sujetos a límites de gasto de funcionamiento de sus principales recursos, debiendo asignar la mayor parte a inversión. La Ley Marco de Autonomías (2010) ratificó esta regla, de manera transitoria.

Si bien el espíritu de esta disposición era que los gobiernos subnacionales cumplan con la principal atribución de realizar la inversión pública, los últimos años, especialmente desde la caída de los ingresos por hidrocarburos, el porcentaje del presupuesto que los gobiernos subnacionales asignan a proyectos de inversión se ha reducido de manera notable.

La disposición transitoria novena de la Ley Marco de Autonomías establece que los límites de gasto de funcionamiento de las entidades territoriales autónomas deberán ser establecidos por ley específica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y entre tanto, para los gobiernos autónomos departamentales se aplicará un máximo de 15% sobre el total de ingresos provenientes de regalías departamentales destinado a gastos de funcionamiento, Fondo de Compensación Departamental e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados.

Pero también autoriza a las gobernaciones, adicionalmente a las competencias establecidas en la Constitución, financiar hasta 10% de los recursos departamentales con cargo al 85% de inversión para los programas sociales, ambientales y otros.

Y para las entidades municipales e indígena originarias campesinas se establece como porcentaje máximo destinado para gastos de funcionamiento 25%, que para efectos de cálculo se aplica sobre el total de recursos específicos, coparticipación tributaria y Cuenta Especial Diálogo Nacional 2000 HIPC II (para financiar los gastos de funcionamiento, solo se pueden utilizar los recursos específicos y los de coparticipación tributaria).

Esta disposición proviene de la normativa previa al proceso constituyente, puesto que fue definida inicialmente en el marco de la Participación Popular y la Descentralización Administrativa de los años 90. La disposición transitoria de la Ley Autonomías solo ratifica lo establecido en periodos anteriores.

Bajo este marco y de acuerdo con lo definido en la Constitución, los gobiernos subnacionales tendrían como principal atribución la inversión pública en diferentes sectores, mientras que el Nivel Central es la instancia que debería definir las políticas (además de ocuparse de los principales gastos corrientes de sectores como salud, educación, policía y otros).

En el transcurso del tiempo, desde los años 90 hasta la fecha, se presentaron diferentes disposiciones que abren la norma. En el caso de los municipios, la Ley de Gastos Municipales N° 2296, de 20 de diciembre de 2001, permite que diferentes gastos califiquen como inversión, como los de mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia.

Asimismo, con relación a los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), no se han definido restricciones por tipo de gasto; y la Ley Marco de Autonomías establece que las entidades territoriales autónomas podrán utilizarlos en el ámbito de sus competencias, en conformidad con la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales vigentes.

El tema de los límites de gasto de funcionamiento -que es uno de los determinantes de la relación entre gasto corriente e inversión- está pendiente de discusión y ha quedado como disposición transitoria de la Ley Marco de Autonomías desde la gestión 2010.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta el tema de la autonomía, puesto que la norma establece que la administración de los recursos de las entidades territoriales autónomas se ejercerá con autonomía económica financiera, para decidir el uso de sus recursos; en ese sentido, surge el cuestionamiento si debería existir una norma o regla fiscal que determine los límites o la relación entre gasto corriente e inversión, o debería existir una regla nacional para todos los niveles de gobierno, incluso para el Nivel Central.

Existiendo esta restricción, el Pacto Fiscal hubiera podido constituirse en el espacio para generar acuerdos y prioridades, con base en un análisis de costos (costeo) de sectores o

competencias, diferenciando los gastos de inversión y los gastos corrientes.

REFORMAS Y RECORTES

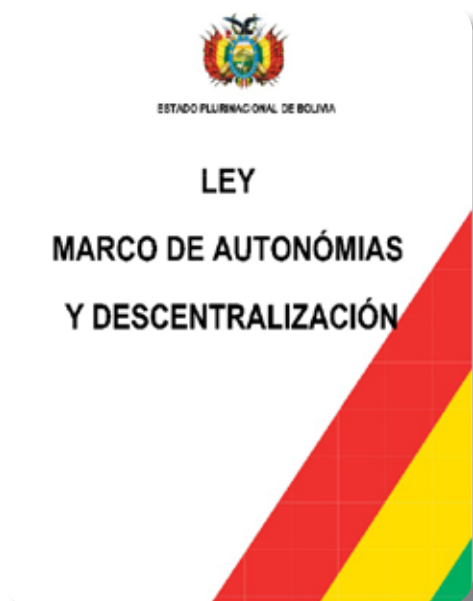
Otro de los elementos que habrían afectado la proporción de la inversión de los gobiernos subnacionales es el hecho de que durante la última década el Gobierno Central impulsó diferentes determinaciones, establecidas en leyes y decretos, para atender diferentes gastos con cargo a recursos de los gobiernos subnacionales; tanto como recortes presupuestarios específicos como a través de la obligatoriedad de asignar un porcentaje de recursos a algún fin específico.

Gobernaciones y municipios fueron obligados a asignar recursos para Seguridad Ciudadana y bono para personas con discapacidad; y se les aplicaron recortes para el pago de la Renta Dignidad, el Fondo de Educación Cívica y el Fondo de Promoción a la Inversión en Hidrocarburos.

Estas determinaciones afectan, por un lado, a la disponibilidad de recursos para los gobiernos subnacionales y, por otro, orientan los recursos que podrían ser para inversión hacia otros gastos obligatorios. La inversión de los gobiernos subnacionales ha caído tanto en términos nominales como en porcentajes.

La inversión es un determinante del desarrollo y el crecimiento; por lo tanto, se debería asegurar niveles de inversión mínimos para mejorar o al menos mantener la prestación de bienes y servicios públicos en sectores o competencias que corresponden a gobiernos subnacionales, como ser educación, salud, saneamiento básico y otros.

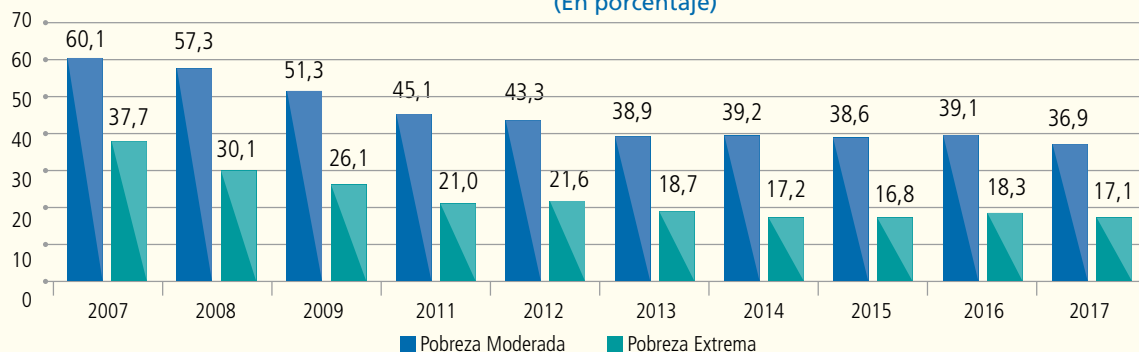
En este sentido, queda pendiente la discusión de la atribución de los gobiernos subnacionales como impulsores del desarrollo a través de la inversión y/o de prestadores de servicios a través de los gastos corrientes y funcionamiento; y en qué proporciones deberían cumplir ambas funciones.



Pobreza moderada baja a 36,9% y pobreza extrema a 17,1%



Bolivia: Indicadores de Pobreza
(En porcentaje)



Fuente: Elaboración propia con datos del INE.

Durante la gestión 2017, la pobreza moderada llegó a 36,9% y la pobreza extrema a 17,1%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas cifras revierten el crecimiento de la pobreza que se había registrado un año anterior.

El indicador de pobreza moderada alcanzó el nivel histórico más bajo durante el año pasado. Para el caso de la pobreza extrema, los resultados fueron mejores el 2015, cuando se llegó a 16,8%. Sin embargo, desde el año 2011 hay más de cuatro millones de personas en situación de pobreza.

POBREZA EXTREMA

Considerando los datos desagregados por área geográfica de residencia, en el área rural, todavía 34,6% de la población vive en extrema pobreza. Departamentos como Potosí, Chuquisaca y Cochabamba tienen más habitantes en esta condición y, por tanto, es necesario promover el crecimiento del sector agrícola y el desarrollo rural.

En el área urbana, este mismo indicador afecta a 9,3% de la población. La cifra registró un leve descenso en comparación a un año anterior; pero también se advierte que la extrema pobreza se mantiene en el área urbana de forma estructural.

POBREZA MODERADA

Aunque las tasas de pobreza de la gestión 2017 muestran trayectorias descendentes en las áreas urbanas y rurales –y en ambas áreas la reducción fue de más de 20 puntos porcentuales desde 2007– se presentan algunas diferencias.

En el área rural, la pobreza todavía afecta a más de la mitad de la población y se mantiene por encima de 55%. En cambio, en el área urbana, los porcentajes de personas en situación de pobreza disminuyeron entre 2007 y 2013; luego, entre 2014 y 2016, se registró un incremento. Después de esos tres años, en 2017 se redujo a su nivel más bajo, 28,2%.

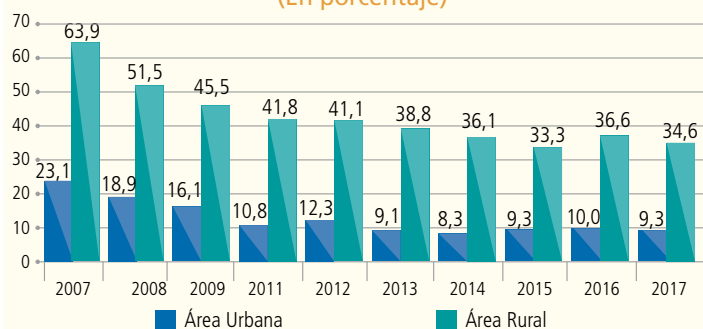
Aunque el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para reducir la pobreza definitivamente, contribuye a mejorar la situación de subsistencia. En la gestión 2016, el crecimiento económico fue de 4,3%, uno de los más bajos desde 2010. En 2017, las cifras preliminares muestran que el crecimiento del PIB fue de 4,2%.

Tomando en cuenta que la población extremadamente pobre es aquella que no tiene los ingresos suficientes para comprar un conjunto mínimo de alimentos, en 2016, el nivel de precios de los alimentos se incrementó más que en la gestión 2017.

El nivel inflacionario de alimentos consumidos en el hogar fue de 6,9% durante 2016, mayor respecto a 2017, cuando alcanzó a 2,6%. Este indicador también contribuyó a que baje la pobreza extrema.

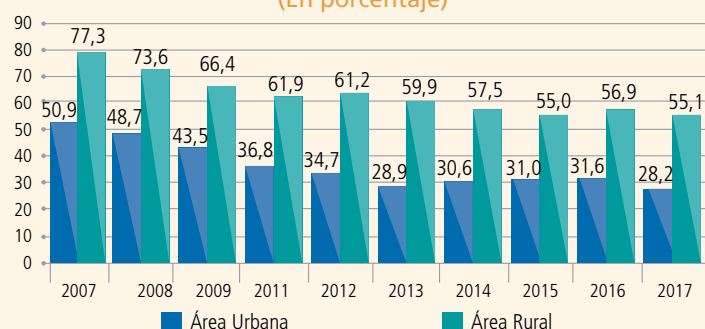
Con el propósito de cuidar que las cifras de la pobreza no vuelvan a aumentar, es necesario continuar poniendo énfasis en reducir la desigualdad a través de políticas que favorezcan a los sectores más vulnerables.

Bolivia: Evolución de la pobreza extrema según área geográfica
(En porcentaje)



Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE - INE

Bolivia: Evolución de la pobreza moderada según área geográfica
(En porcentaje)





La **consulta en hidrocarburos** es previa, obligatoria y debe articularse a **planes de gestión territorial**

Entre los años 2010–2015, la producción de hidrocarburos en el país se incrementó en 50% como resultado de una explotación más intensiva de las reservas ya descubiertas y, posiblemente, con el propósito de monetizar las mismas en un contexto de altos precios de exportación, en especial del gas natural.

Sin embargo, la gestión sectorial descuidó la implementación de políticas orientadas a desarrollar la actividad exploratoria que permita reponer las reservas que se venían consumiendo, por lo que actualmente existe una disminución en la producción nacional de hidrocarburos, un solo campo nuevo en producción y el máximo potencial productivo se encuentra por debajo de los máximos volúmenes contractuales que podrían demandar simultáneamente al país los mercados a los que se comercializa hidrocarburos.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

En la práctica, la política hidrocarburífera es asumida por el Gobierno Central, específicamente por el Ministerio de Hidrocarburos, que tiene bajo su dependencia a YPFB como operador del sector; ambos actores, en la actualidad, definen la ubicación de las áreas reservadas para la exploración y explotación.

En este sentido, con el propósito de desarrollar la actividad hidrocarburífera en el país, desde el año 2007, el Poder Ejecutivo ha venido reservando 100 áreas de exploración y explotación de hidrocarburos a favor de YPFB, mediante varios decretos supremos. Sin embargo, esta política ha sido asumida exclusivamente desde el Nivel Central de gobierno, amparados, probablemente, en el artículo 298 de la Constitución Política del Estado, pero omitiendo la coordinación con los Planes de Ordenamiento Territorial de cada departamento, como establece el artículo 300 de la misma Constitución.

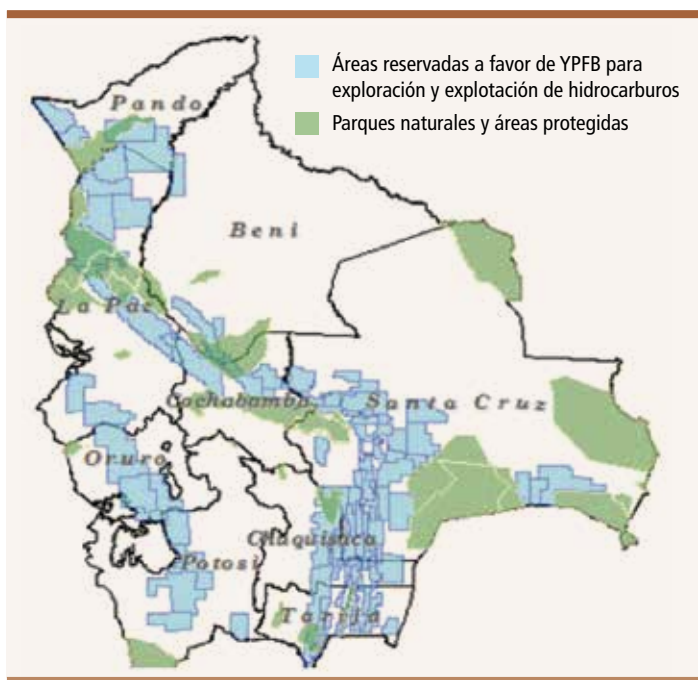
Un criterio fundamental, y probablemente más importante que lo descrito anteriormente, es que la decisión del Nivel Central de reservar áreas de exploración y explotación de hidrocarburos a favor de YPFB debería haber considerado que el artículo 115 de la Ley de Hidrocarburos N° 3058 indica que, en cumplimiento al Convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por Bolivia, “en todos los casos, la consulta se realizará en dos momentos:

- » a) Previamente a la licitación, autorización, contratación, convocatoria y aprobación de las medidas, obras o proyectos hidrocarburíferos, siendo condición necesaria para ello; y,
- b) previamente a la aprobación de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental. Cuando se trate de Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental para actividades, obras o proyectos hidrocarburíferos a desarrollarse en lugares de ocupación de las Comunidades y Pueblos Campesinos, Indígenas y Originarios y áreas de alto valor de biodiversidad, necesariamente tendrán que ser los de categoría 1 (Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Integral).

Si bien la consulta previa tiene carácter obligatorio y las decisiones resultantes de ese proceso deben ser respetadas, el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Hidrocarburos, pretende aplicar este instrumento luego de haber reservado las áreas de exploración y explotación a favor de YPFB. Es decir que a las comunidades indígenas no se les está consultando, de forma previa, si quieren o no actividad hidrocarburífera en su zona, puesto que cuando el Ministerio hace la consulta, el área en cuestión ya ha sido reservada a favor de YPFB y, eventualmente, cuenta ya con un contrato de servicio suscrito con una empresa petrolera, sea nacional o extranjera.

Una clara muestra son las áreas de exploración y explotación hidrocarburífera denominadas San Telmo Norte y Astillero que están sobrepuestas a la Reserva de Flora y Fauna de Tariquia, en el departamento de Tarija, donde el Ministerio de Hidrocarburos pretende posponer el proceso de consulta previa hasta antes de iniciar las actividades de exploración; a pesar de tener ya suscritos contratos de servicios de exploración y explotación de hidrocarburos para ambas áreas que –al ser medidas legales y administrativas que pueden afectar a las comunidades de la zona– claramente debieron haber sido consultadas de forma previa.

Desde mayo de 2007 hasta marzo de 2017 se emitieron 6 decretos supremos que reservan 100 áreas para exploración y explotación



de hidrocarburos a favor de YPFB, estos decretos incluyen los nombres de las áreas, número de parcelas, coordenadas y su categoría como Zonas Tradicionales y Zonas No Tradicionales¹. A partir de esta definición, YPFB prioriza las áreas y regiones en las cuales realizará las actividades de exploración y explotación por sí misma o a través de la suscripción de contratos de servicios con empresas mixtas, privadas o públicas, privadas o nacionales.

Otro hecho relevante es que si bien estas áreas de exploración y explotación vienen siendo reservadas a favor de YPFB desde el año 2007, hasta la fecha no existe ningún resultado positivo. Por lo tanto, ante la necesidad de encontrar nuevas reservas de gas natural o petróleo, el Gobierno aprobó el 2015 el Decreto Supremo N° 2366 que autoriza la exploración en parques naturales y áreas protegidas. Como se observa en el mapa, 15 de las 100 áreas reservadas a favor de YPFB se superponen a parques naturales y áreas reservadas, lo cual supone una considerable afectación dado que se trata de ecosistemas interrelacionados entre sí y con una alta vulnerabilidad.

¿Y LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL?

El artículo 298 de la Constitución reconoce al Gobierno Central la competencia de formular políticas de planificación territorial y ordenamiento territorial; y asigna a los niveles de gobierno departamental, municipal e indígena originario campesino la atribución exclusiva de formular los planes de ordenamiento territorial.

La determinación de áreas hidrocarburíferas de manera inconsulta por parte del Gobierno Central puede tener una contraposición con lo definido en los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos subnacionales.

Por esta razón, la CPE establece que la elaboración y ejecución de estos planes subnacionales deberían tener coordinación con los planes del Nivel Central del Estado y de otras instancias.

¹ Esta división se realiza en función a la cantidad de información que se tenga del área, así son Zonas Tradicionales cuando se tiene bastante información y Zonas No Tradicionales cuando hay escasa información.

No realizar una consulta previa que defina si las comunidades próximas, los municipios y la población del departamento están o no de acuerdo con la actividad hidrocarburífera en una determinada zona se constituye en un desincentivo para cualquier inversionista, ya que luego de suscribir un convenio de estudio, negociar el contrato y que éste sea autorizado y finalmente aprobado por la Asamblea Plurinacional de Bolivia se podría encontrar con que la población involucrada rechaza el proyecto en su zona. Para entonces la empresa petrolera ya habría incurrido en gastos e inversiones, tanto en las actividades realizadas bajo el convenio de estudio, como en costes administrativos en toda la gestión que implica la negociación y aprobación de un contrato.

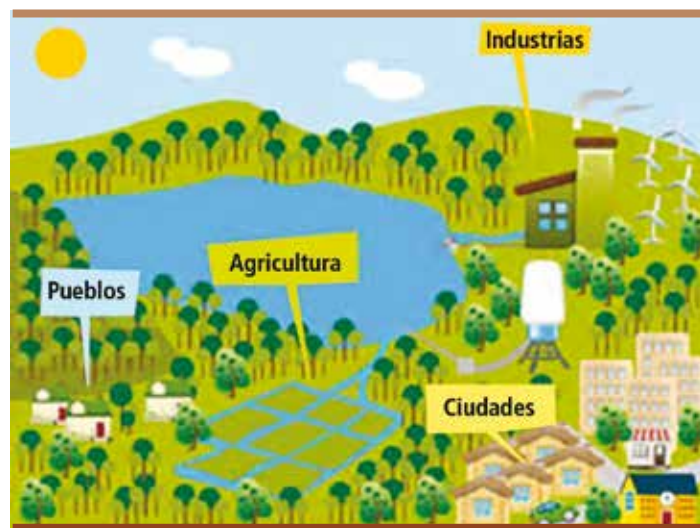
Por tanto, si se cumple lo establecido en el texto constitucional y las áreas reservadas para la exploración y explotación son definidas previa consulta con la población involucrada, y en coordinación entre las políticas del Nivel Central y los planes de ordenamiento territorial de las diferentes regiones, se tendrían áreas reservadas libres para el ingreso de la actividad hidrocarburífera, lo cual resta costos financieros y garantiza las operaciones acordadas.

¿QUÉ PUEDE HACER EL NIVEL SUBNACIONAL?

Dado que en la actualidad existen 100 áreas reservadas a favor de YPFB, los niveles departamentales, municipal y de pueblos indígena originario campesinos deben desarrollar una propuesta de Plan Territorial de Desarrollo Integral, el cual, de acuerdo con la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), debe ser elaborado por gobiernos de las entidades territoriales autónomas en su jurisdicción territorial, con participación de los actores sociales, según corresponda.

También las autonomías indígena originario campesinas deben realizar su planificación territorial, en el marco de la planificación de la gestión territorial comunitaria. En los artículos 17 y 18 de esta norma se detallan los procesos de construcción de ambos planes.

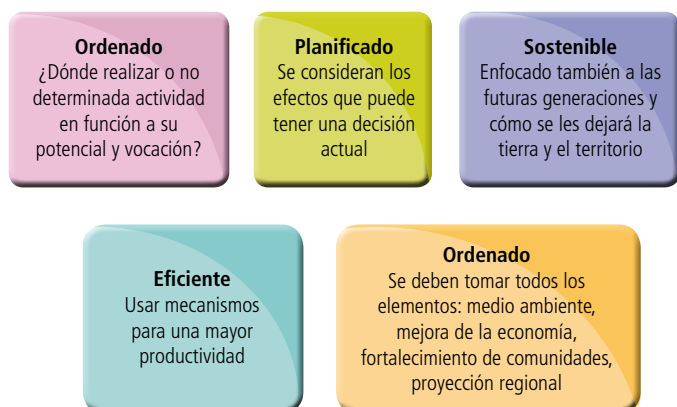
Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) constituyen la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos municipales.



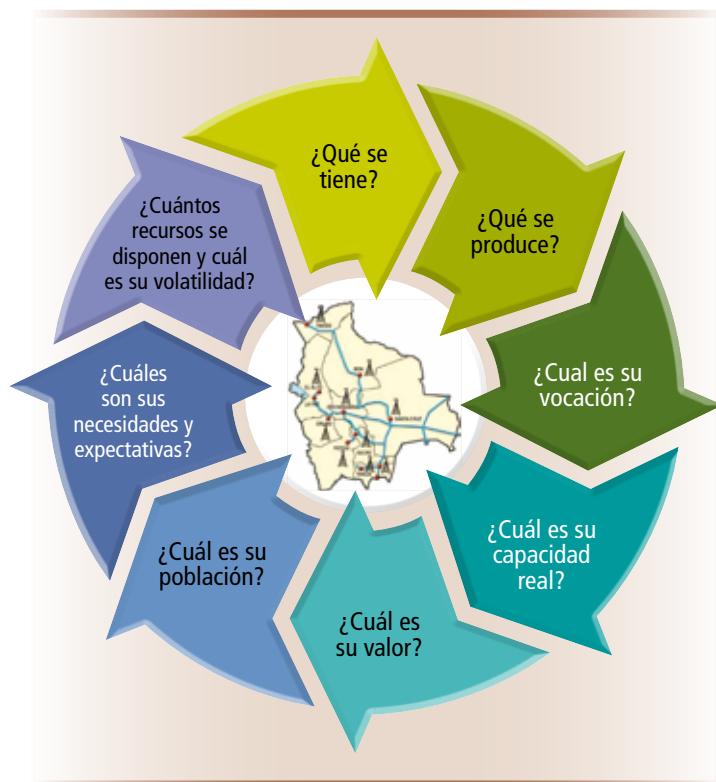
² Cartilla Gestión Territorial, Comité Boliviano UICN https://cmsdata.iucn.org/downloads/_cartilla_gestion_territorial.pdf

Por su parte, los Planes de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC) están orientados a fortalecer la planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de las naciones y pueblos que las componen, tomando en cuenta sus propias visiones sociales, culturales, políticas y económicas.

De manera general, el Ordenamiento Territorial o también llamado Gestión Territorial Integral es el manejo ordenado, planificado sostenible y eficiente de la tierra y territorio².



Para iniciar un proceso de Gestión Territorial inicialmente se debe realizar un diagnóstico técnico sobre la tierra y el territorio, y de los pueblos indígenas y comunidades que viven en él, definiendo:



Posteriormente, se debe ordenar la tierra y territorio en función a su potencial, vocación y aptitud de uso, definiendo los proyectos que deben ser promovidos para alcanzar el desarrollo esperado.

También es importante definir normas de autorregulación en el acceso y utilización de los recursos naturales que se encuentren en la tierra y territorio, buscando el beneficio para todos.

En el ámbito organizativo, se debe crear y fortalecer una institución encargada de controlar, fiscalizar, representar y dirigir la gestión definida para el territorio.

De esta manera, en el Plan de Gestión Territorial, consensuado a nivel departamental, municipal y de pueblos indígena originario campesinos se traduce en la decisión de cómo se manejará la tierra y el territorio, y a partir de ello se debería iniciar la coordinación con el Nivel Central sobre el ordenamiento territorial relacionado con las áreas reservadas para la exploración y explotación hidrocarburífera.

Así, en este espacio se definirían cuáles de las áreas reservadas para la actividad hidrocarburífera estarían habilitadas para dichas actividades de acuerdo con el plan de la región, lo cual previene la generación de conflictos y promueve un mejor desarrollo del sector.

DIVERSIFICACIÓN Y POSTEXTRACTIVISMO

Bolivia ha explotado sus yacimientos de hidrocarburos desde hace casi un siglo. El sector ha generado importantes ingresos que ahora forman parte esencial del Presupuesto General; entre 2004 y 2014, en promedio, ha llegado a significar cerca de 40% del total, lo cual resulta delicado dado que un solo sector económico representa más de un tercio de los ingresos fiscales del Gobierno General.

Sin embargo, durante los últimos tres años se ha vuelto a manifestar la volatilidad de estos ingresos, como efecto de la dependencia de los precios internacionales del petróleo, lo que escapa al control del Gobierno, pero impacta en los ingresos fiscales. Esto ha generado que la economía nacional retorne a escenarios de déficit fiscal, con los riesgos que supone para proyectos de inversión social a largo plazo.

El excedente económico obtenido por la explotación de hidrocarburos debe servir para desarrollar otros sectores económicos y depender cada vez menos de la explotación de este recurso no renovable como fuente de financiamiento para ingresos fiscales.

El país requiere una política hidrocarburífera sostenible a largo plazo, que garantice la soberanía energética nacional y, por otra parte, se logre el cumplimiento de compromisos de exportación actuales y venideros, como resultado de un desarrollo integral del sector. Esta política debería ejecutarse en estricto respeto a los derechos de los pueblos indígena originarios campesinos de ser consultados de forma previa a cualquier acto administrativo o legal que pueda afectarles, como establece el artículo 30 de la Constitución.

La recomendación de otros países que ya han transitado por esta ruta es trabajar arduamente en lograr un cambio en la matriz productiva nacional que fortalezca a otros sectores de la economía que permitan generar ingresos alternativos a los provenientes de la exportación de hidrocarburos.

El país requiere una política hidrocarburífera sostenible a largo plazo, que garantice la soberanía energética nacional y, por otra parte, se logre el cumplimiento de compromisos de exportación actuales y venideros, como resultado de un desarrollo integral del sector.



El **litio** entrará a la lista de **recursos naturales** que **serán exportados**

“Ya producimos carbonato de litio, en los siguientes años vamos a exportar carbonato de litio, litio metálico, hidróxido de litio, hidróxido de magnesio, cátodos, baterías de litio, además de sales de potasio a Europa y Asia”, anunció el vicepresidente, Álvaro García Linera, en su discurso del 6 de agosto.

Hasta antes de esa información, el Gobierno propugnaba la línea de la industrialización del litio en territorio boliviano, como un cambio en la historia de la explotación de los recursos naturales que salen del país sin valor agregado. Pero ese anuncio oficial muestra que hubo un gran cambio en la estrategia: habrá una comercialización de litio como materia prima y se industrializará sólo una parte.

En abril de este año, la alemana ACI System había sido elegida como la empresa socia de Bolivia para industrializar el litio y cambiar la característica minera del país de ser exportador de materias primas. Esta alianza implicaría mayor participación estatal en la cadena de valor.

De ocho empresas internacionales interesadas en el litio boliviano —cinco chinas, una canadiense, una rusa y otra alemana— ACI System fue seleccionada por ofrecer condiciones para acceder a tecnología, instalar fábricas de baterías e insumos en territorio nacional, acceder a mercados, generar rentabilidad y dar

sostenibilidad a los proyectos, distribución de utilidades, además de capacitar al personal boliviano, entre otros aspectos evaluados.

La instancia estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) definió como línea estratégica que la fase de obtención de la materia prima esté completamente a cargo de emprendimientos nacionales y luego lograr una alianza con empresas extranjeras para pasar a la fase de la industrialización en territorio nacional.

Al comenzar agosto, el gerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, hizo una declaración a la prensa que, sumada a la del Vicepresidente, confirma el giro de la estrategia hacia la posición convencional, vender materia prima sin valor agregado.

“Hemos recibido algunas ofertas para entrar en asociación con plantas de batería fuera de Bolivia. Es probable que, en algún momento, además de contar con una industria de baterías hechas en Bolivia, también podamos tener presencia empresarial en plantas de baterías que están fuera del país, principalmente en Asia”.

“Hay muchas empresas interesadas en garantizar la provisión de carbonato de litio o hidróxido de litio para sus plantas de baterías... Si se da la oportunidad, los ingresos que se generen serán mayores y en beneficio del Estado”, dijo Montenegro, al periódico La Razón.

Es posible deducir que la falta de desarrollo industrial en el país hace muy cara la producción de baterías, pues no existen fábricas nacionales para proveer los insumos necesarios en caso de una urgencia ni la mano de obra calificada para manejar la sofisticada tecnología de la fabricación de esas fuentes de energía; pero también es probable que las noticias procedentes de países vecinos hayan influido para este viraje: en el contexto regional, en

Perú se descubrió un importante yacimiento de litio, ubicado en Puno, que proporcionará hidróxido y no carbonato de litio. Por otro lado, se han activado inversiones cuantiosas en Argentina y Chile para intensificar la explotación de sus reservas.

MERCADOS

El mercado potencial, principalmente para las baterías de litio, es Europa, donde el uso de vehículos eléctricos ha crecido de manera vertiginosa en los últimos años. Más de 25% del parque automotor corresponde a este tipo de motorizados. Este cambio tiene diversas razones: la tendencia a reemplazar progresivamente a los combustibles fósiles, principalmente hidrocarburos, la presión por disminuir la contaminación ambiental y el avance tecnológico que aumenta la autonomía de las baterías.

La ACI Systems dijo a Americas Quarterly, en un comunicado, que "la intención de Bolivia no era encontrar un socio en los mercados más grandes, sino uno que brindara apoyo a lo largo de la cadena completa de creación de valor".

La compañía agregó que ellos serían responsables de elegir la tecnología apropiada y los socios de mercadeo, así como la capacitación de los empleados bolivianos.

Aunque algunos especialistas sugerían la presencia de Tesla en esta instancia, ninguna empresa norteamericana se presentó a la convocatoria de la YLB. Esta puede ser una señal de la percepción de los inversores externos del sector minero respecto a temas como la inseguridad jurídica, las nacionalizaciones y la rentabilidad y distribución de utilidades.

Para el país, esta apuesta por industrializar el litio es una oportunidad frente a las frustraciones registradas durante el siglo XX en áreas como la siderurgia, metalurgia y otras líneas de producción, lo que ocurrió como consecuencia de una estructura estatal alejada de la producción, perjudicada por aparatos burocráticos, corrupción, inexperiencia en gestionar proyectos de magnitud e influencias de intereses externos.

Como ejemplo, el año 2010, cuando Bolivia intentó montar plantas para procesar los minerales de zinc y hacer lo mismo que con el estaño, esos intereses externos interesados en la compra de concentrados de zinc expresaron, abiertamente, que no colaborarían a Bolivia para la instalación de esas plantas porque el mineral boliviano generaba 25.000 empleos en su país, entre otros beneficios adicionales.

Los minerales bolivianos son recursos naturales no renovables, sobre los que históricamente se aplica una regalía muy baja, alrededor de 5% en promedio, e impuestos de ley, quedando una porción significativa para los operadores de la extracción y para los comercializadores. Al ser explotados, el país reduce un patrimonio irremplazable.

CAMBIO DE PROYECCIONES

Llegar a las baterías supone recorrer un largo camino. El salar de Uyuni, debajo de una costra de un espesor menor a un metro, tiene un líquido (salmuera) que contiene, entre otros

elementos, el litio. El primer paso del proceso consiste en extraer el litio de este líquido.

Un aspecto a ser analizado es la dimensión del proyecto. Inicialmente, se había anunciado una producción de 700.000 toneladas anuales de sales de potasio y de 30.000 toneladas de carbonato de litio.

Hasta el momento, la planta de obtención de las sales de potasio ha empezado a funcionar y también se seleccionó a la empresa que construirá la planta de carbonato de litio. Las dimensiones de las dos serán la mitad de las que se habían programado inicialmente; es decir, 350.000 toneladas anuales de potasio y 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Sin embargo, la capacidad de producción de la planta de litio será de 40.000 toneladas anuales con la recuperación del hidróxido de litio.

MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDADES

Dos facetas de este proyecto deben ser vigiladas de cerca: el impacto ambiental y la relación con las comunidades.

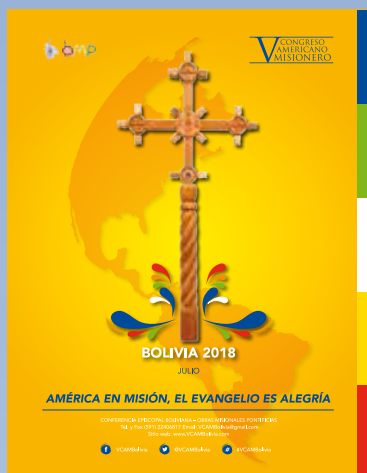
En el primer punto, debido a que se instalarán varias otras fábricas para producir los insumos que precisa la batería, el riesgo de impactar seriamente en el ecosistema es grande. La tecnología moderna es cada vez más amigable con el entorno; pero no significa que sea inocua. Las normas no han sido redactadas para lo que se viene, por lo que habrá que tomar las precauciones adecuadas.

Respecto a las comunidades, en Bolivia hay una antigua relación entre actividad minera y campesina que ha funcionado de manera dinámica, prevaleciendo los ingresos que generaban ambos oficios. No es extraño que la agropecuaria no sea rentable a la escala que se trabaja en el altiplano. El espejismo de la quinua ha desaparecido y la realidad es muy dura para los agricultores; por esto, cuando en el entorno se proyecta una actividad minera se provoca una migración de campesinos al sector minero; inicialmente de manera temporal (agromineros), pero, después, definitivamente.

Si los habitantes de las comunidades consiguen un buen empleo en la operación minera dejarán el agro, hay casos de estas características en lugares como San Cristóbal, Huanuni, Himalaya, Catavi o Corocoro, donde incluso los temas medioambientales se han sobrepuesto a la expectativa de generación de ingresos económicos.



V CAM: LA IGLESIA MISIONERA DE AMÉRICA ASUME DESAFÍOS TRANSFORMADORES



La Iglesia Católica del continente asumió compromisos para renovar su misión evangelizadora haciéndose presente en todas las realidades del mundo de hoy, con la fuerza transformadora y con la alegría del Evangelio, que impulsa a trabajar abriendo vías de comunión y reconciliación en los ámbitos sociales, políticos, interreligiosos y eclesiales.

Bolivia fue sede del V Congreso Americano Misionero, realizado del 9 al 14 de julio de 2018, en Santa Cruz de la Sierra, encuentro en el que participaron alrededor de 3.500 congresistas, entre ellos dos cardenales -uno enviado especial del Papa Francisco- cerca de un centenar de obispos, religiosos y laicos de todos los países del continente, acogidos por la Iglesia boliviana.

“Nuestra Iglesia está preocupada especialmente por los siguientes grandes fenómenos de nuestro continente: La crisis de la familia con todos sus problemas derivados, el desprecio y la violencia contra la vida y la dignidad humana, la vulneración de los derechos humanos, el

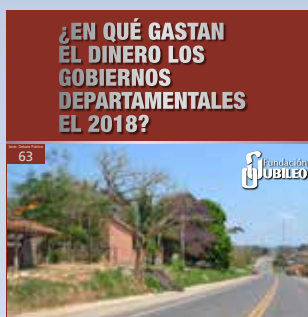
dominio económico de unos pocos que genera desempleo y pobreza, el panorama de injusticia y de falta de solidaridad que deja tras de sí el ser humano en la época del secularismo, la necesidad de cuidar a la hermana madre tierra, la preocupante situación de desigualdad y de violencia a que está sometida la mujer, las migraciones, la población indígena, los aspectos sombríos de la misma Iglesia, golpeada sobre todo por los escándalos de la pederastia, el descenso de las vocaciones sacerdotales, la modernidad débil y relativista así como la negatividad y la inmoralidad inherentes a dicha modernidad”, señala el documento de conclusiones.

El Congreso se subdividió en diferentes espacios de participación: subasambleas (5), talleres (12) y conversatorios (4). Fundación Jubileo estuvo a cargo de la Comisión de Metodología, instancia que formuló los instrumentos para recoger los aportes de los participantes y conformó un equipo de sistematizadores con participación de diversas áreas de la Conferencia Episcopal Boliviana.



EL POTENCIAL EN LOS 339 MUNICIPIOS DE BOLIVIA

Esta publicación, realizada por Análisis Real-Latinoamérica (ARLAT), con apoyo de Fundación Jubileo, presenta una síntesis del desarrollo desde una visión local y regional sobre el valor que cada municipio genera en términos de producción, valor agregado y otras variables, según sector y actividad económica.



PRESUPUESTO DE GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

- Los gobiernos departamentales disponen de Bs 7.218 millones para esta gestión.
- Sin acuerdos en el Pacto Fiscal, las gobernaciones tienen limitaciones para financiar el desarrollo.
- Este año, el presupuesto del Gran Chaco fue separado del resto de Tarija.

www.jubileobolivia.org.bo

Director Ejecutivo:

Juan Carlos Núñez Vidaurre

Coordinador General:

Waldo Gómez R.

Responsable de edición:

Jorge Jiménez Jemio

Dirección:

La Paz, Bolivia

Edif. Esperanza

Av. Mcal. Santa Cruz 2150, Piso 2

Telf: (591-2) 2125177 – 2311074

Equipo técnico:

René Martínez C.

Raúl Velásquez G.

Jaime Pérez C.

Herbert Irahola F.

Héctor Córdova E.

Sandra Sánchez C.

Cecilia Rocabado C.

Ima Aillón V.

Muriel Pérez O.

Administración:

Mirian Clavijo

Jhovana Machicado

Raquel Ortuño

Bladimir Herrera

Publicación con apoyo de
KZE-Misereor Alemania

D.L. 4-3-61-12



Fundacion Jubileo

fundajub@entelnet.bo



@JubileoBolivia